

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 1º Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-11034-2022  
CARATULADO : CATALÁN/FISCO DE CHILE

Santiago, uno de Septiembre de dos mil veintitrés

**VISTOS:**

A folio 1, comparece **FRANCISCO BUSTOS BUSTOS**, abogado, cédula de identidad N° 16.937.964-5, en representación de **LUIS ARMANDO CATALÁN CAVIERES**, chileno, casado, Pensionado, cédula de identidad N° 6.147.996-1, y de **EDUARDO CATALÁN CAVIERES**, chileno, soltero, Pensionado, cédula de identidad N° 6.147.065-4, todos domiciliados en Príncipe de Gales N° 88, comuna de Santiago, Región Metropolitana, deduciendo demanda civil de indemnización de perjuicios por la comisión de crímenes de lesa humanidad, en juicio ordinario, en contra del **FISCO DE CHILE**, persona jurídica de derecho público, RUT N° 61.806.000-4, representado legalmente por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, **JUAN ANTONIO PERIBONIO PODUJE**, abogado, cédula de Identidad N° 7.834.852-6, domiciliado en Agustinas N° 1225, piso 4º, comuna y ciudad de



Foja: 1

Santiago; solicitando que condene a la demandada a resarcir los perjuicios causados por los actos ilícitos perpetrados en su contra, que derivaron en violaciones a sus garantías fundamentales y derechos humanos por la suma de \$ 150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos) para cada uno o la suma que se estime en justicia a favor de cada uno, con costas.

Expone o relata primeramente **Luis Armando Catalán Cavieres**, quien indica que, el día 30 de enero de 1976, fueron detenidos con su hermano Eduardo en circunstancias que se hicieron presentes en el domicilio de sus padres, dos sujetos que se identificaron como funcionarios de investigaciones (policía civil) - siendo que pertenecían a la Armada de Chile - y manifestaron que solo harían unas preguntas y luego regresarían a casa en un par de horas, y al no tener temas pendientes con la justicia salen de casa sin oponer resistencia. Al salir señala que los introducen en un vehículo de color rojo y al subir, son encañonados con una pistola de 9mm en la nuca y son obligados a vendarse la vista y a sentarse para que nadie los viera desde afuera. Luego de muchas vueltas en el auto para hacerles creer que estaban en Santiago, acabaron



**Foja: 1**

llevándolos al Cuartel Silvia Palma de la Armada de Chile en Valparaíso.

Añade que, durante esos días fue sometido a diversos tipos de apremios físicos y psicológicos, con un trato denigrante y vejatorio, con serio riesgo de perder la vida, debido a los golpes de puño y armamento militar que usaban para doblegarlo; abstinencia de dormir; frío, hambre y sed por trece interminables días y durante los interrogatorios insistían en saber sobre los nombres y direcciones de contactos con la Resistencia y una serie de preguntas a las que ni siquiera sabía qué responder. Siendo amenazado que si no denunciaba a sus compañeros de partido, matarían a su hermano Eduardo ya detenido y a su familia. En dos oportunidades le hicieron enfrentar el pelotón de fusilamiento. Mientras todo esto ocurría, sus padres y hermanos los buscaban con desesperación sin encontrar respuesta en ninguna parte, hasta que finalmente les encontraron en Santiago en el Campo de Prisioneros Políticos de Tres Álamos.

Continua exponiendo que, cuando finalmente sus torturadores deciden deshacerse de su hermano Eduardo y él, fueron cargados y amarrados con un



**Foja: 1**

grupo de otros prisioneros de guerra (como ellos les llamaban), vendados y apretados en la parte trasera de una camioneta que además cubrieron con una lona donde casi no podían respirar, las amarras apretaban ferozmente sus muñecas y tobillos y las vendas en los ojos impedían reconocer con quienes compartían ese traslado con destino desconocido. Es así, que fueron transferidos a la DINA porque no pudieron obtener la información que buscaban de ellos (nexos con el sacerdote católico Miguel Woodward Iribarri y casas de seguridad de miembros del Mapu), según dijo el funcionario de la Armada de Chile al encargado de recibirlos en Cuatro Álamos, ubicado al interior del Campo de Concentración de Tres Álamos, en donde operaba ese servicio de la DINA. Finalmente señala que tras pasar por múltiples otras situaciones de inenarrables sufrimientos, fue transferido junto a su hermano al Campo de Melinka, ubicado en la comuna de Puchuncaví, de la Quinta Región, desde donde finalmente fueron oficialmente puestos en libertad en junio de 1976 tras llevarlos nuevamente a Tres Álamos, para que firmaran una declaración en la que decían que no habían sido víctimas de tortura ni malos tratos en general, condición *Sine qua non* para poder recuperar su libertad; y que en la Comisión



Foja: 1

Nacional sobre Prisión Política y Tortura o "Comisión Valech I", ha sido reconocido como víctima con el número de registro N° 5312.

Luego relata **Eduardo Catalán Cavieres**, quien señala que, con anterioridad a las fechas, ya había sido detenido, también, por los servicios de inteligencia (SIRE) de la Armada de Chile, la que se debió a un error por alcance de nombre con una vecina de apellidos similares.

Prosigue indicando que, a fines de enero de 1976, fueron detenidos con su hermano mayor Luis Armando en circunstancias que se hicieron presentes en el domicilio de sus padres, dos funcionarios que se identificaron como del Servicio de Inteligencia de la Armada quienes le manifiestan que le buscaban y que solo le harían unas preguntas y luego regresaría a su casa. Junto a su hermano salieron de la casa y en esas circunstancias los introducen en un vehículo de color rojo, luego de avanzado un poco en el camino, proceden a vendarles la vista. Intentaron resistirse a esos malos tratos pero no tuvieron éxito y luego de varias vueltas acabaron llevándolos al Cuartel Silva Palma de la Armada de Chile en Valparaíso. Ya en ese cuartel, vio los



**Foja: 1**

abusos que allí se cometían y reaccionó increpando a los torturadores - tal y como ha declarado en la causa de Haydee Oberreuter - luego le trasladaron a una pieza que operaba como sala de interrogatorio en la que se le preguntaba por nombres y direcciones de supuestos contactos con la Resistencia y siendo sometido a diversos tipos de apremios que aún con su condición de ex soldado de la infantería de marina se le hacían muy difíciles de soportar.

Añade que a su hermano lo vio en tres oportunidades, en una de ellas fue cuando les simularon un fusilamiento. Siempre buscaron intimidarlos con el riesgo para la vida del otro durante todo el tiempo que duró el secuestro. Y mientras esto ocurría, sus padres y hermanos los buscaban con desesperación sin encontrar respuesta hasta que finalmente aparecieron en Santiago en el Campo de Prisioneros Políticos de Tres Álamos, donde los pasaron a "libre plática" y pudieron reencontrarse con los suyos.

Asimismo relata que, mientras permanece prisionero vio otros detenidos que indica y que, además, pudo reconocer en el cuartel unos cabos y sargento indicando sus nombres; y cuando finalmente



Foja: 1

deciden deshacerse de ellos junto a otras personas que no pudo reconocer; amarrados unos a otros, vendados y muy apretados en la parte trasera de una camioneta que cubrieron con una lona, al parecer, fueron entregados a la DINA el área de interrogatorio al interior del Campo de Prisioneros de Tres Álamos, conocido como Cuatro Álamos en donde operaba ese servicio de inteligencia.

Finalmente señala que, tras pasar por múltiples otras situaciones de inenarrables sufrimientos, finalmente fueron oficialmente puestos en libertad en junio de 1976 desde Tres Álamos; y que en la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura o "Comisión Valech I", ha sido reconocido como víctima con el número de registro N° 5312.

Como fundamentos jurídicos de la pretensión invocada y siendo los hechos descritos en la demanda graves violaciones a los derechos humanos, consistentes en crímenes de lesa humanidad, como la tortura y persecución entre otros. En este caso, se han vulnerado todos aquellos instrumentos de carácter internacional que consagren el derecho a la vida y a la integridad personal, principalmente, los artículos 1, 3 y 5 de la Declaración Universal de los



**Foja: 1**

Derechos Humanos, el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1° de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, los artículos 6, 7 y 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todo el contenido de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, los Principios de Núremberg, los Convenios de Ginebra de 1949, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y las normas de *ius cogens* relativas a crímenes internacionales. Y en atención a que los hechos ilícitos por los cuales se demanda como crímenes de trascendencia internacional indica que por un lado está la obligación de reparación en el derecho internacional y la responsabilidad del Estado y la obligación de reparar en el derecho chileno.

A continuación se explyea en lo que ha señalado parte importante de la legislación y doctrina internacional y nacional, acerca de la responsabilidad del Estado sobre la materia y la obligación internacional de los Estados de reparar



Foja: 1

en caso de incurrir en ilícitos internacionales, esto es, argumenta que en crímenes de lesa humanidad el Estado de Chile no puede eludir su responsabilidad civil por los padecimientos y dolores irrogados, evadiendo la normativa humanitaria internacional de naturaleza jus cogens, exponiendo, además, varios fallos donde se indica la inaplicabilidad del derecho común, reconociendo la imprescriptibilidad de la acción reparatoria deducida en autos.

Añade que, la obligación de reparar el daño que constituye un principio básico del Derecho Internacional y el derecho a una reparación adecuada y suficiente frente a una violación a una norma u obligación primaria ha dejado de ser simplemente un "principio general del derecho reconocido por las naciones civilizadas" en los términos del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para llegar a ser reconocido como una obligación en el sistema del Derecho Internacional general, por lo cual toda vulneración o violación de un compromiso internacional que haya producido daño hace surgir un deber de repararlo íntegra y adecuadamente.



Foja: 1

Prosigue señalando que, el derecho de reparación a las víctimas ha sido consagrado en diferentes instrumentos internacionales relativos a los derechos de los afectados por graves crímenes internacionales como: Declaración sobre los "Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder", "Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad" y los "Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones". Y en lo relativo al crimen internacional de tortura, actos horrorosos de los cuales fueron víctimas los actores, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Y agrega que, con todo lo expuesto y de acuerdo a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Chile, existe la obligación de reparar en la materia que se viene demandado y en tal sentido ha sido el propio Estado el que ha reconocido su responsabilidad en estos hechos en forma expresa a



**Foja: 1**

través del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, donde queda constancia de la sistematicidad de las graves violaciones a los derechos humanos y la represión en todo el territorio nacional

En cuanto al daño y monto de la indemnización moral, luego de examinadas las fuentes de la responsabilidad del Estado respecto de los ilícitos relatados, y reconocidos expresamente por ella a través del reconocimiento a los demandantes como víctimas de violencia política y tortura, señalan que de lo extensamente relatado es posible sostener que se encuentra acreditada la conducta ilícita de los agentes estatales, el daño provocado por ellos y la relación causal existente entre las secuelas provocadas con la violencia y tortura de la que fueron objeto durante su periodo de detención y lo que existe en cada uno de ellos es un daño de carácter moral que se expresa en dolor, sufrimiento, angustia, sensación de pérdida, rabia e impotencia ante la situación extremadamente violenta, injusta e ilegítima que vivieron. Las dolorosas situaciones a las que se han visto enfrentados, los sentimientos de persecución, el desapego familiar, los problemas de salud derivados de las torturas recibidas y



Foja: 1

principalmente el enorme daño psicológico provocado, todo lo cual los lleva a afirmar que indudablemente se ha producido un daño moral, el cual, según la dogmática jurídica y la jurisprudencia nacional e internacional, amerita ser reparado a través de una indemnización, la que implica en el caso de violación a los derechos una reparación integral que tiene múltiples funciones: disuadir, sancionar, ejemplificar, y, sobre todo, restablecer la situación al estado anterior de su comisión o perpetración, ya sea en términos reales -*restitutio in integrum*- o en términos sustitutivos -la indemnización por equivalencia (Aguilar, Gonzalo. "Crímenes internacionales y la imprescriptibilidad de la acción penal y civil: referencia al caso chileno". En revista *Ius et Praxis*, V. 14 n°2, año 2008, pp. 147-207.).

**A folio 7,** consta notificación de conformidad con lo que dispone el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil a la parte demandada con fecha 26 de octubre de 2022.

**A folio 8,** contesta la demandada el CDE, solicitando, en síntesis, su total rechazo en base a las excepciones, defensas y alegaciones que expone



**Foja: 1**

oponiendo como primera cuestión, la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizados los actores y para ello parte afirmando que no resulta posible comprender el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos si no se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional, y para mirarse en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria se ha de considerar lo que se ha llevado adelante con la "Justicia Transicional" cuyo uno de sus pilares es el denominado dilema "justicia versus paz". En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos, por ello esgrime la improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizados los actores, exponiendo latamente, el marco general sobre las reparaciones otorgadas, agregando que las negociaciones entre el Estado y las víctimas, revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover



Foja: 1

recursos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras, radicadas en grupos humanos más específicos; concurso de intereses que se exhibe normalmente en la diversidad de contenidas que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación; programas que incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas, diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero.

Asumida esta "idea reparatoria", tanto la Ley 19.123 y las demás normas conexas, como por ejemplo la Ley 19.992, referida a las víctimas de tortura, han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado la compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica como nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional.

Así, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a) reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre



Foja: 1

prestaciones estatales específicas; y c) reparaciones simbólicas; mediante los cuales se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que lo que busca no es otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas. Las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo también -como se ha mencionado- a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos. En términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de: A) Pensiones: la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech); B) Bonos: la suma de \$41.910.643.367.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992; C) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.- D) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$23.388.490.737.- En consecuencia, a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.-



Foja: 1

En la especie, los actores han percibido beneficios pecuniarios al amparo de las Leyes N° 19.234 y N° 19.992 y sus modificaciones. La ley 19.992 que estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo "Listado de Prisioneros Políticos y Torturados" de la nómina de personas reconocidas como víctimas; lo que indica acreditará oportunamente; haciendo presente además que las mismas partes percibieron en forma reciente el aporte único de reparación Ley N°20.874, por \$ 1.000.000.-

Agrega que a los beneficiarios, tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, les fue concedido el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en servicios de salud del país, agregando que también se les otorgaron beneficios educacionales, consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores, a través de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación; y asimismo, beneficios en vivienda.



Foja: 1

Finalmente, hace presente las reparaciones simbólicas, mediante actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones; las que pretenden reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor -siempre discutible en sus virtudes compensatorias- sino tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir el daño moral.

De lo expuesto, sostiene que puede concluirse que los esfuerzos realizados por el Estado para reparar a las víctimas de DDHH han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones razonables a nuestra realidad financiera; escenario en el que tanto la indemnización que se solicita en autos, como el cúmulo de reparaciones hasta ahora aludidas, pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos, de lo que resulta concluir que los referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños, no pudiendo ser, entonces, reparados nuevamente; citando jurisprudencia relativa a tal situación; motivo por el cual, en definitiva, **opone la**



Foja: 1

**excepción de reparación integral**, por ya haber sido indemnizados los demandantes.

Además de la excepción de reparación integral alegada, opongo a la demanda la excepción de prescripción extintiva de la acción deducida, con arreglo, en primer lugar, a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo texto, solicitando en consecuencia que, por encontrarse prescrita la acción, se rechace la demanda en todas sus partes.

Según el relato efectuado por los demandantes, las detenciones ilegales, privaciones de libertad y torturas que sufrieron, ocurrieron entre enero y junio de 1976 aproximadamente, entonces, aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en Septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el **26 de octubre de 2022**, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el



Foja: 1

citado artículo 2332 del Código Civil; motivo por el cual opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en dicha norma.

En subsidio, y para el caso de que el Tribunal estime que dicha norma no es aplicable al caso de marras, **opone la excepción de prescripción extintiva** de 5 años, contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514, del ya citado código; debido a que, entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil de marras, transcurrió también con creces, el plazo pertinente.

Posteriormente, realiza un lato análisis relativo a la prescripción en lo referente a la materia de marras, haciendo presente que no existe norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, por lo que debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual (artículo 2332); agregando que el plazo debe contarse, en la especie, no desde la detención del demandante, sino que desde que los



Foja: 1

titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia; haciendo presente además que numerosa jurisprudencia sobre la materia reiteran tal circunstancia.

Indica que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que cabe aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece, como se dijo, al ámbito patrimonial. Por otro lado, sostiene que de determinados instrumentos internacionales, en ninguno se contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en la materia; haciendo presente que dichos instrumentos, tales como la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad", los "Convenios de Ginebra", la "Resolución N° 3.074, de fecha 3 de



Foja: 1

Diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas", y la "Convención Americana de Derechos Humanos", establecen imprescriptibilidad para las acciones penales.

En subsidio de las defensas planteadas, y en cuanto al daño e indemnización reclamadas, formula las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y del excesivo monto pretendido; señalando que la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral, resulta excesiva, teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile y los montos promedios fijados por nuestros Tribunales de Justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.

En subsidio de las excepciones previas, indica que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos por el actor de parte del Estado, conforme a las leyes de reparación (N°19.234 y 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que, por lo demás, "seguirá percibiendo a título de pensión", como también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tuvieron por



**Foja: 1**

objeto reparar el daño moral y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales; haciendo presente que, de no accederse a tal petición subsidiaria, implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo que contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

A **folio 10**, se tiene por contestada demanda y se da traslado para la réplica.

A **folio 11**, la parte demandante evacuó el trámite de la réplica, reitera todos los argumentos de hecho y derecho aludidos en el libelo de demanda y solicita el rechazo absoluto de todas y cada una de las excepciones, defensas y alegaciones opuestas.

A **folio 12**, se tiene por evacuada réplica y se da traslado para la dúplica.

A **folio 13**, el demandado evacuó el trámite de la dúplica, ratificando las argumentaciones expuestas en su contestación de demanda.

A **folio 14**, se tiene por evacuada dúplica.

A **folio 16**, se recibió la causa a prueba.



Foja: 1

A folio 39, se citó a las partes a oír sentencia.

**CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, a folio 1 comparece, **ROLANDO BERNABÉ AGURTO JIMÉNEZ, MARCO ANTONIO AGURTO JIMÉNEZ, y ERIC EUGENIO AGURTO JIMÉNEZ,** deduciendo demanda ordinaria de Indemnización de Perjuicios por responsabilidad del Estado en contra del **ESTADO DE CHILE,** que actúa bajo la personalidad jurídica del Fisco de Chile, representado legalmente por doña María Eugenia Manaud Tapia, en su calidad de Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, solicitando que condene a la demandada a resarcir los perjuicios causados por los actos ilícitos perpetrados en su contra, que derivaron en violaciones a sus garantías fundamentales y derechos humanos por la suma de \$ 150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos) para cada uno o la suma que se estime en justicia a favor de cada uno, con costas.

Fundan su pretensión en los argumentos ya explicitados en la expositiva, que por economía procesal, se tienen por reproducidos para todo efecto legal.



Foja: 1

**SEGUNDO:** Que, notificado el demandado, contestó la demanda, conforme las alegaciones y defensas debidamente reseñadas en la expositiva, que por economía procesal, se tienen por reproducidos, también, para todo efecto legal.

**TERCERO:** Que, a objeto de acreditar sus alegaciones, la parte demandante se valió de las siguientes probanzas:

**I.- Documental:**

**Primer otrosí de escrito de folio 1:**

1.- Copia del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech I), Anexo Listado de Prisioneros políticos, donde aparecen **Eduardo Catalán Cavieres** y **Luis Armando Catalán Cavieres** como víctimas reconocidas, con los números 5311 y 5312.

2.- Copia del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, correspondiente a un extracto del Capítulo VI "Recintos de detención" sobre los centros de la Armada de Chile en la Región de Valparaíso, de páginas 260-264, y 305-309.

3.- Copia de un extracto de la querella criminal presentada en causa Rol 25-2015 seguida ante el Sr.



Foja: 1

Ministro Rafael Corvalán Pazols de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, por los querellantes **Eduardo Catalán Cavieres y Luis Armando Catalán Cavieres**, y otros, correspondiente a las fojas 1-3 del expediente.

4.- Copia de un extracto de la querella criminal presentada en causa Rol 25-2015 seguida ante el Sr. Ministro don Rafael Corvalán Pazols de la Iltma.Corte de Apelaciones de Valparaíso, por los querellantes **Eduardo Catalán Cavieres y Luis Armando Catalán Cavieres**, correspondiente a las fojas 15-17 del expediente (conteniendo relatos de los demandantes).

5.- Copia de Declaración de **Eduardo Catalán Cavieres** en la causa a Rol 25-2015 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fojas 1279-1280.

6.- Copia de Declaración Judicial de **Eduardo Catalán Cavieres** en la causa a Rol 25-2015 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fojas 1281-1282.

7.- Copia de Declaración de don **Luis Catalán Cavieres** en la causa a Rol 25-2015 de la Iltma.



Foja: 1

Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fojas 1287-1289.

8.- Copia de Declaración Judicial de don **Luis Catalán Cavieres** en la causa a Rol 25-2015 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, de foja 1290.

9.- Informe Protocolo de Estambul (examen físico) realizado respecto de **Eduardo Catalán Cavieres**, por la perito evaluadora Dra. Martha Elena Pataquiva Wilches, Médico Perito Forense del Servicio Médico Legal, presentado en la causa Rol 25-2015.

10.- Informe Protocolo de Estambul (examen físico) realizado respecto de **Luis Catalán Cavieres**, por la perito evaluadora Dra. Martha Elena Pataquiva Wilches, Médico Perito Forense del Servicio Médico Legal, presentado en la causa Rol 25-2015.

**A folio 22:**

11.- Copia de Norma Técnica N° 88. Para la Atención en Salud de Personas afectadas por la represión política ejercida por el Estado en el período 1973-1990, elaborado por la Subsecretaría de



Foja: 1

Salud Pública del Ministerio de Salud, de 30 de junio de 2006.

12.- Excma. Corte Suprema. Causa Rol 18.179-2019. Sentencia de casación de 06 de diciembre de 2019, caratulado "Torres con Fisco".

13.- Excma. Corte Suprema. Causa Rol 18.179-2019. Sentencia de reemplazo de 06 de diciembre de 2019, caratulado "Torres con Fisco".

14.- Excma. Corte Suprema. Causa Rol 13.877-2019. Sentencia de casación de 24 de diciembre de 2021, por el homicidio de don Augusto Cepeda Venegas.

15.- Excma. Corte Suprema. Causa Rol 13.877-2019. Sentencia de reemplazo de 24 de diciembre de 2021, por el homicidio de don Augusto Cepeda Venegas.

16.- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2018.

17.- Escrito de contestación del Estado de Chile en el Caso Órdenes Guerra, Rol CDH-2-2017/038, en el mes de febrero 2018, donde se reconoce



Foja: 1

responsabilidad internacional por aplicar la prescripción civil en causas de derechos humanos.

## **II.- Testimonial:**

**A folio 36,** rindieron la testifical de María Angélica Barrientos Muñoz, Carlos Antonio Molina Molina, Haydee Melania del Carmen Oberreuter Umazabal y Adolfo Tomás Lara Cortés, quienes declararon:

**La primera que,** conoce a los hermanos Catalán desde enero de 1976, cuando fueron como grupo de militantes MAPU, retenidos y torturados primeramente en el Cuartel Silva Palma de la Armada de Chile, en la ciudad de Valparaíso. Añade que ellos han tenido primeramente daño físico y daño psicológico profundo, sin considerar el daño social y económico, como efecto de haber pasado por la prisión política y la tortura, y ello se manifiesta en el estrés post traumático que tiene Armando, a quien se ve como una persona aparentemente normal y sana hasta que uno empieza a conversar con él, la afectación que esto significo en su vida familiar, y "en el caso de Eduardo Catalán ha sido mucho más latente, uno puede ver el desgaste y la poca integración que ha tenido, no ha podido hacer una vida normal de familia, no ha podido tener pareja, no se ha podido integrar a un



Foja: 1

trabajo, sentirse menoscabado por la situación vivida." Ambos, indica, que no están muy cuerdos, tienen problemas de confusión de memoria con todo lo pasado y no se relacionan con la demás gente en forma normal como el común de la gente, esto debido al estrés post traumático de sentirse mal y avasallados en su integridad y en su calidad de ciudadanos.

Repreguntada si sabe si los demandantes se encuentran o han tenido tratamiento psiquiátrico: Responde: "Si, pero abandonan con facilidad las consultas y las terapias psiquiátricas, porque ellos tienen mucha desconfianza para tratar su situación personal, es muy difícil, y esporádico, esto en el caso de Eduardo, pero en el caso de Armando no lo sé, porque nunca le he preguntado."

Añade que "Es evidente el desgano al día a día poco ánimo, dificultad para enfrentar los problemas y para socializar."

Repreguntada si conoce algún hecho ilustrativo que represente los daños sufridos por los demandantes: Responde: "Primero en el caso de Eduardo ha sido un abandono total a cuidar su salud, tiene una diabetes profunda, con un pie diabético



Foja: 1

que le han cortado, se resiste y tiene que ser mucho para que lo lleven a un hospital, se descompensa con facilidad, pierde la noción del tiempo y de donde está su memoria esta frágil. En el caso de Armando es más difícil de percibir porque su profesión lo ha ayudado a auto cuidarse también tiene rasgos de daño profundo y que se niega a aceptar."

**El segundo que,** conoce a los demandantes desde a finales de los 70 o a principios de 1971, por el movimiento MAPU en la sede de calle Brasil en Valparaíso donde teníamos reuniones periódicas de educación política por el movimiento MAPU.

Continua declarando que, el hecho de que estuvieran detenidos tanto en la Academia de Guerra Naval de Valparaíso como en el cuartel Silva Palma, lo que sabe porque estando ahí sus interrogadores los nombraban. Y "por el hecho de la violación de sus derechos humanos y prohibirles la libertad de pensamiento le ha afectado la vida diaria. Su proyecto de vida, lo que tenían no pudo seguir, se le cerraron todas las puertas."

Agrega que, "Inmediatamente después de lo que sufrieron no tuvieron instancias de ayuda y quedaron a la deriva de cualquier asistencia médica,



Foja: 1

psicológica y neurológica que pudiera tratarse para lograr estabilizarlos, porque las pesadillas y los sueños los han tenido siempre y el miedo a ser nuevamente detenidos y torturados, son secuelas que no sé cómo se puedan medir realmente.

Y este tratamiento psicológico lo hemos ido haciendo entre nosotros por una necesidad biológica, cada vez que nos juntábamos y conversábamos todas estas cosas, era muy traumático, salieron de todo esto y lo peor es que no tenían de donde acogerse."

Repreguntado si recuerda alguna anécdota o hecho que pueda ser ilustrativa de lo que el menciona como inseguridad interna: Respuesta: "Bueno, cada vez que nos encontrábamos no estábamos tranquilos, pensábamos que estábamos reorganizándonos de nuevo y por lo tanto, Vivian con la actitud de mirar siempre atrás a un fantasma o una presencia, o sea desconfianza total, vivir en la intranquilidad. Esto es algo que se mantiene hasta el día de hoy, están las pesadillas recurrentes y recordar los hechos sufridos en ese entonces."

**La tercera que,** "tiene la impresión de que conocí a la familia Catalán Cavieres en el marco del proceso de alfabetización de pobladores que se



Foja: 1

desarrolló en los años 70 en los cerros de Valparaíso, creo que siendo estudiante secundaria de tercero o cuarto medio y ellos pobladores del cerro Los Placeres de Valparaíso."

En relación al daño moral por los crímenes, el secuestro y la tortura de que fueron víctimas los demandante señala que "soy testigo directo en el caso del daño físico y moral que le fue infringido a Eduardo Catalán es algo inenarrable, concretamente compartimos prisión política y tortura en el cuartel Silva Palma en la Academia de Guerra Naval en Valparaíso a fines del año 1975 y los hermanos Catalán estaban vinculados a la Armada de Chile, su padre era un respetado sub oficial de la Armada y Eduardo era Instructor de los infantes de marina, y en esas circunstancias se encontró con torturadores que habían sido sus discípulos a quienes reconoció con nombre y apellidos, por ello la forma de trato con él fue especialmente violenta y dura y por extensión, algo semejante hicieron con su hermano Luis Armando, que no era militar, pero como familiar lo trataron así." Agrega que la brutalidad del tratamiento que sufrió Eduardo fue por protegerla ya ella estaba embarazada en la prisión y como joven sentía una obligación moral profunda respecto de la



Foja: 1

protección de las mujeres y por ello tuvo consecuencias, lo colgaron, lo golpearon, lo electrocutaron.

Asimismo señala que "Recuerdo que el general Contreras cuando visitó el cuartel, amenazó a los hermanos de que no iban a tener nunca una vida, y si bien es cierto que aún viven, también es cierto que en la práctica sus vidas llegaron hasta ahí y la próxima vez que vi a Eduardo iba en una micro cantando para ganar dinero, esto fue en el año 1981 y Armando nunca ha vuelto a tener estabilidad laboral, desarrolló una muy marcada tendencia a la auto sanación, incluso siempre ha intentado que quienes fuimos compañeros de prisión con él también emprendiéramos el camino de la auto sanación, no ha tenido mucho éxito en ese esfuerzo pero él lo intenta, esto porque queda en la piel y en la memoria el dolor y el recuerdo de las torturas sufridas y todo lo sufrido se terminó extrapolando a la posibilidad de que luego nos atendiera alguien."

Repreguntada si pudiera describir la personalidad de los demandantes en la actualidad producto de los daños sufridos: Responde: Ello tienen una personalidad marcada por la tradición



Foja: 1

naval de la que vienen de hombres valientes y de alguna manera todo el terror que le quedo metido en su historia y en su vida hace que hoy sean personas profundamente dañadas y auto protegidas.

Repreguntada respecto de las consecuencias laborales sufridas por los demandantes por los hechos sufridos: Respuesta: "No, ellos no pudieron llevar una vida laboral, Eduardo cantó por mucho tiempo en las micros y en negocios ha intentado muchas pequeñas cosas que no han tenido una continuidad en el tiempo y su hermano Armando tampoco, ha intentado tener una suerte de consulta propia como terapeuta ocupacional, pero en estricto rigor quienes llevan su casa y su familia, con un detrimento muy fuerte de su autoestima, son su esposa y sus hijos."

**Y el cuarto que,** conoce a los demandantes desde estuvieron "detenidos en el campo de detenidos de Puchuncaví, estábamos en la misma causa del grupo del MAPU, eso fue el año 1976."

Preguntado si sabe o cómo le consta la forma en que los demandantes han sufrido daño moral por los crímenes, el secuestro y la tortura de que fueron víctimas, y si pudiera describir ese daño en la



Foja: 1

afirmativa: Responde: "Aún mantengo con ellos relación telefónica y de visitas y ellos están en muy malas condiciones, en el caso de Eduardo con una diabetes avanzada que lo tiene postrado en cama, sometido a constantes exámenes. Noto como daño el hecho de que no pudieron tener trabajo estable los dos hermanos, luego de la detención sufrida y eso básicamente por haber quedado fichados en los expedientes del servicio de inteligencia de las fuerzas armadas, sin posibilidad de llegar a ninguna empresa ni aún del sector privado, siempre tuvieron que depender de un trabajo personal y por cuenta propia. Ambos están psicológicamente mal, hablan de pronto incoherencias o relatan cosas un poco irreales, le cuesta asumir las cosas, elucubran mucho."

Repreguntado si los daños psicológicos que mencionan perduran hasta el día de hoy: Responde: "Si, siempre están con mucho resentimiento hacia las fuerzas armadas y contra todo el mundo, siempre con mucho rencor hacia su pares, eso como manifestación de su estado psicológico."

**CUARTO:** Que, el demandado solo rinde como probanza la documental, que rola a folio 17,



Foja: 1

consiste en oficio Ord. DSGT N° 4792-10799, de 22 de noviembre de 2019, del Sr. Jefe (S) del Departamento Secretaría General y Transparencia del Instituto de Previsión Social, Alexander Suarez Olivares, que informa los beneficios que han recibido los demandantes, en su calidades de víctimas de Prisión Política y Torturas, Valech.

Dicho informe indican que **Catalan Cavieres Luis Armando**, percibe pensión Ley N° 19.992 desde el 02/2005 al 11/2022 la suma de \$ 34.394.685.-; por aporte único Ley N° 20.874, la suma de \$ 1.000.000.-; por concepto de aguinaldo durante el periodo la suma de \$ 584.535.- Todo lo cual da un total a la fecha de \$ 35.979.220.- y con una pensión actual Valech de \$ 251.517.-

Y que **Catalan Cavieres Eduardo**, percibe pensión Ley N° 19.992 desde el 02/2013 al 11/2022 la suma de \$ 34.073.044.-; por aporte único Ley N° 20.874, la suma de \$ 1.000.000.-; por concepto de aguinaldo durante el periodo la suma de \$ 584.535.- Todo lo cual da un total a la fecha de \$ 35.657.579.- y con una pensión actual Valech de \$ 251.517.-

**QUINTO:** Que, son hechos de la causa, por no haber sido objeto de controversia, que se encuentran



Foja: 1

además acreditados con el mérito de los documentos reseñado en los motivos anteriores, los siguientes:

1. Que los actores tiene la calidad de "Víctimas de Prisión Política y Tortura", conforme al Informe Valech con números de registro N° 5311 **Catalan Cavieres Eduardo** y N° 5312 **Catalan Cavieres Luis Armando**.

2. Que, al mes de diciembre de 2022, los actores han percibido: **Catalan Cavieres Luis Armando**, las sumas de \$ 34.394.685.- por pensión Ley N° 19.992 y por aguinaldo \$ 584.535.- y **Catalan Cavieres Eduardo** las sumas de \$ 34.073.044.- por pensión Ley N° 19.992 y por aguinaldo \$ 584.535.-

3. Que, al mes de diciembre de 2022, los actores Luis Armando y Eduardo, ambos de apellidos Catalan Cavieres han percibido, también, cada uno la suma de \$ 1.000.000.-, por Aporte Único de Reparación Ley N° 20.874.- para víctimas Valech, y que tienen una pensión mensual, como exonerados y ex presos políticos, que a la fecha asciende a \$ 251.517.-



Foja: 1

**SEXTO:** Que, el 11 de Noviembre de 2003, transcurridos **13 años** desde que se restableció el Estado de Derecho en nuestro país, durante el gobierno del Ex Presidente, S.E Ricardo Lagos Escobar, se dictó el Decreto N° 1040, mediante el cual se creó la "Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el Esclarecimiento de la Verdad acerca de las Violaciones de Derechos Humanos en Chile", cuyo objetivo, de acuerdo a las palabras del propio gestor, fue determinar el universo de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, entre Septiembre de 1973 y Marzo de 1990; que se materializó en un Informe que consta de más de 500 páginas, elaborado con 28.000 testimonios de considerados válidos (se recibió testimonio de 35.865 personas, residentes en Chile como en el extranjero); de los que, con la debida prudencia y cautela, se deja constancia en el mismo informe, sin individualizar nombres ni algún otro dato personal, sino únicamente el sexo del declarante, y el lugar en que fue detenido.

Conjuntamente con el informe, la Comisión elaboró un listado con los nombres de las personas a quienes se les reconoció la calidad de Presos



Foja: 1

Políticos y Torturados, con un total de **27.153** personas.

**SÉPTIMO:** Que, posteriormente, y con ocasión del resultado de la labor de la Comisión, fue dictada la Ley N° 19.992, publicada con fecha 24 de Diciembre de 2004, que "Establece Pensión de Reparación y Otorga otros Beneficios a Favor de las Personas que indica", cuyo artículo primero, contenido en el Título I "De la pensión de reparación y bono", dispone: *"Establécese una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de Prisioneros Políticos y Torturados", de la Nómina de personas reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior."*

El artículo segundo, establece que la pensión anual aludida, ascendería a **\$ 1.353.798.-**, para aquellos beneficiarios menores de 70 años de edad; a **\$ 1.480.284.-** para aquellos beneficiarios mayores de 70 o más años pero menores de 75 años; y a **\$ 1.549.422.-**, para aquellos beneficiarios de 75 o más



Foja: 1

años de edad; pensión que se pagaría en 12 cuotas mensuales de igual monto, reajutable conforme lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley N° 2.448, de 1979, o en las normas legales que reemplacen dicha disposición.

Su inciso segundo, establece que la pensión referida, sería incompatible con aquellas otorgadas en las leyes números 19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quiénes se encuentren en tal situación optar por uno de estos beneficios en la forma que determine el Reglamento; precisando que las personas que ejercieran dicha opción, tendrían derecho a un bono de **\$ 3.000.000.-**, el que se pagaría por una sola vez dentro del mes subsiguiente de ejercida la opción.

El artículo séptimo, dispone que tanto la pensión como el bono establecidos, se devengarían a partir del primer día del mes subsiguiente a la fecha en que los beneficiarios presenten sus solicitudes, las que podrían ser solicitadas desde la publicación de la misma (ley).

**OCTAVO:** Que, por otro lado, mediante la Ley N° **20.874**, publicada con fecha 29 de Octubre de 2015, que "Otorga un aporte único, de carácter



Foja: 1

reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile", de acuerdo a su artículo primero, se otorgó un aporte único en carácter de reparación parcial, de **\$ 1.000.000.-**, a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y a los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N° 19.992 y N° 20.405, respectivamente.

El inciso tercero, dispone que: *"Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura."*, por lo que habrá de considerarse el monto recibido por los demandantes en este concepto, al momento de determinar las indemnizaciones pertinentes.

**NOVENO:** Que, tal como consta del documento reseñado en el motivo QUINTO, los actores, **Luis**



Foja: 1

**Armando Catalan Cavieres**, cédula de identidad N° 6.147.996-1 y **Eduardo Catalan Cavieres**, cédula de identidad N° 6.147.065-4, detentan la calidad de "Preso Político y Torturado", constando en autos que perciben en virtud de tal calidad, al mes de diciembre de 2022, la suma de \$ 1.000.000.-, por concepto de aporte único establecido por la Ley N° 20.874, lo que lleva a establecer que el actor fue beneficiario de la Ley N° 19.992, como asimismo, de la pensión fijada por la Ley N° 20.874.

**DÉCIMO:** Que, la excepción de pago (reparación integral) opuesta por el Fisco de Chile se ha fundado, como ya se dijo, en que los actores ya han sido indemnizados, en razón de haber recibido beneficios pecuniarios al amparo de la Ley N° 19.992 y sus modificaciones; resultando en consecuencia improcedente ser indemnizados por daños cuya génesis radica en idénticos hechos.

**UNDÉCIMO:** Que, al respecto, cabe aplicar los argumentos esgrimidos por la Excma. Corte Suprema, en orden a que el hecho de reconocer el Estado la condición de "Preso Político y Torturado" constituye un acto unilateral, y sus efectos, como en la especie lo es el pago de la pensión a las víctimas,



Foja: 1

no resulta posible entenderlos como una "indemnización", como pretende el Fisco al sostener su excepción de pago o reparación integral, ya que, de aceptarse tal circunstancia, daría lugar a entender que lo que el Estado de Chile pretendió al crear la "Comisión Valech" fue, con el mérito de sus resultados, en estricto rigor, efectuar una "transacción" con cada uno de los beneficiados, para así precaver la interposición de una acción como la de marras; cuestión que no aparece del tenor literal de la ley, ni tampoco de su espíritu, toda vez que en ella se establece que la pensión sería incompatible con aquellas otorgadas en las leyes números 19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quienes se encontraren en tal situación optar por uno de dichos beneficios en la forma que determine el Reglamento; situación de la que resulta entonces concluir que, no obstante ser los actores beneficiarios de la pensión otorgada por el Estado, en su condición de "preso político torturado", tal hecho no era óbice para que interpusieran la acción civil pertinente, como lo han hecho mediante la demanda de marras; motivos todos los cuales conducen a **desestimar la excepción de pago (reparación integral) opuesta por el Fisco.**



Foja: 1

**DUODECIMO:** Que, en subsidio de la excepción razonada previamente, el demandado opuso la excepción de prescripción de la acción, fundado en los argumentos ya explicitados en el presente fallo.

Ante tal alegación, cabe tener presente que, fluye del artículo quinto de nuestra Constitución, el ejercicio de la soberanía se realiza por el pueblo a través del plebiscito y, también, se realiza por las autoridades que la misma Carta establece.

Dicho ejercicio, reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana; y es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Dicha disposición constitucional, hace posible incorporar al derecho nacional las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales, tales como la de indemnizar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos; que, en consecuencia, adquiere rango constitucional.



Foja: 1

**DECIMO TERCERO:** Que, la Excma. Corte Suprema, en los autos Rol **22.856-2015**, de fecha 29 de Diciembre de 2015, ha señalado que, "tratándose de un delito de lesa humanidad -lo que ha sido declarado en la especie-, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional, en armonía con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que instaure el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que, en virtud de la ley N° 19.123, reconoció en forma explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de aquellos calificados como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, regalías de carácter económico o pecuniario. En esta línea discurren también SCS Nros. 20.288-14, de 13



Foja: 1

de abril de 2105; 1.424, de 1 de abril de 2014; 22.652, de 31 de marzo de 2015, entre otras.

Por ende, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual resulta discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad indispensables en un Estado de derecho democrático. Entonces, pretender el empleo de las disposiciones del Código Civil en la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el régimen jurídico, hoy resulta improcedente.

Por lo demás, la reparación integral del menoscabo no se discute en el plano internacional, ni se circunscribe a los autores de los crímenes exclusivamente, sino también se prolonga hacia el mismo Estado. La preceptiva internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido, desde que, sin duda, siempre ha existido, con evolución de las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho violentado."



Foja: 1

Por todo lo expuesto, la excepción de prescripción será desestimada; misma suerte que correrá la excepción de prescripción subsidiaria, por encontrar ésta, de igual manera, su fundamento en normas de derecho interno, que, como ya es claro, no son aplicables al caso de autos en el caso de la prescripción de la acción.

**DECIMO CUARTO:** Que, habiéndose desestimado la prescripción de la acción civil, cabe ahora pronunciarse sobre la procedencia de la indemnización pretendida.

Como ya se encuentra acreditado, los actores detentan, la condición de "Preso Político y Torturado", detención que es del todo plausible sostener, se debió al hecho de haber sido, entre enero y junio de 1976 aproximadamente, detenidos para hacerles algunas preguntas sobre los nombres y direcciones de sus contactos con la Resistencia, por su militancia o cercanía con el MAPU, como así lo señalan los demandantes en su demanda.

Siendo tales circunstancias aquellas que motivaron la detención y posterior tortura, física y psicológica; es pertinente señalar que los actos ejercidos por agentes del estado en sus personas,



Foja: 1

debieron necesariamente afectar su estado emocional, de manera inmediata y durante todo el período en que estuvieron detenidos, como también en los tiempos futuros, particularmente en lo que dice relación con sus vidas familiares y laborales.

**DECIMO QUINTO:** Que, con la documental rendida por los demandantes y no objetada por causal legal, en su oportunidad, y la testimonial de María Angélica Barrientos Muñoz, trabajadora social, Carlos Antonio Molina Molina, pensionado, Haydee Melania del Carmen Oberreuter Umazabal, profesora y dirigente de Derechos Humanos y Adolfo Tomás Lara Cortés, carpintero mueblista (de folio 36), todos los cuales declaran, a luz de algunos puntos de la interlocutoria a prueba, sin tacha y encontrándose contestes en los hechos esenciales, en especial, que conocen a los actores desde antes de la época de los hechos en que se funda la demanda y que saben y conocen el estado físico, psicológico, familiar, social y laboral de aquellos, todo lo cual lleva a tener por acreditados y justificados los hechos denunciados y las consecuencias psicológicas y físicas de dicho hecho, los cuales llevaron o derivaron en ser reconocida su calidad de "Presos Político y Torturados", Nómina de personas



Foja: 1

reconocidas como víctimas, del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en donde los demandantes ocupan los lugares **N° 5311, Catalan Cavieres Eduardo, y N° 5312 ,Catalan Cavieres Luis Armando,** y por los Informe de Atención Psicológica de cada uno de los actores de personas afectadas por la represión política ejercida por el Estado en el periodo 1973-1990", elaborada por el Ministerio de Salud del Gobierno de Chile a través de la "Norma Técnica N° 88 para la atención en salud de personas afectadas por la represión política ejercida por el estado en el período 1973-1990", es posible advertir que una persona que es violentada física y psicológicamente, como en el caso de autos, sufre perjuicios y daño emocional que perduran hasta la actualidad y que deben ser reparados.

**DECIMO SEXTO:** Que, encontrándose acreditado el hecho que los actores, debido a la detención ilegítima, torturas, simulación de fusilamiento y el haber pasado por varios centros de detención experimentaron y repercutieron hasta la actualidad, un daño que sólo se puede enmarcar dentro de aquél denominado "moral" que les ha significado no poder desarrollarse normalmente en su entorno familiar, social, cultural y económico, tal como lo relatan en



Foja: 1

la demanda y que fue reafirmado por la declaración de los testigos y que, si bien el demandado justificó, los montos que perciben o han percibido los actores en su calidad de "Preso Político y Torturado", lo que sin perjuicio, hace igualmente plausible acoger la demanda, condenándose al Fisco de Chile, a pagar a cada uno de los actores la suma única y total de **\$ 80.000.000.-, (Ochenta millones)** suma que se estima justa y equitativa, considerando que dichas partes son beneficiarios de las leyes de reparación respectivas ya indicadas, lo que no es óbice para acoger la acción indemnizatoria por el daño sufrido de manos de agentes del Estado.

Por estas consideraciones, y visto además, lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 254, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; el Decreto 1040, de 26 de Septiembre de 2003, la Ley 19.992 y la Ley 20.874;

**SE DECLARA:**

**I.-** Que, **se rechazan** las excepciones de reparación satisfactiva o pago a los actores, y prescripción extintiva principal y subsidiaria.

**II.-** Que, se **acoge parcialmente** la alegación subsidiaria de regulación que el daño moral que debe



Foja: 1

considerar los beneficios consistentes en la reparación integral, solo en cuanto a descontar de la indemnización, lo recibido por el aporte Único de Reparación establecido en la Ley 20.874, rechazándose el resto de la alegación.

**III.-** Que, **se acoge** la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral intentada **a folio 1**, y se condena al Fisco de Chile a pagar a los actores, **Eduardo Catalan Cavieres y Luis Armando Catalan Cavieres**, la cantidad de **\$ 80.000.000.- a cada uno**, en la forma señalada en el motivo final.

**IV.-** Que, la suma indicada, se pagará reajustada de acuerdo a la variación del IPC desde la fecha en que quede firme esta sentencia y el pago efectivo de la indemnización y devengará intereses legales desde que el Fisco incurra en mora y hasta el pago efectivo de la indemnización.

**V.-** Que, no se condena en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida.

Regístrese y notifíquese, y elévese en consulta si no se apelare.

ROL C-11034-2022.-

Nac.///



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WDEYXHXNGL

DICTADA   POR   ISABEL   MARGARITA   ZÚÑIGA   ALVAYAY,  
JUEZA TITULAR DEL PRIMER JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, uno de Septiembre de dos mil veintitrés**

